



GUADALAJARA, JALISCO, A DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

V I S T O S para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por **SALVADOR GONZÁLEZ JAUREGUI**, en contra de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO.**

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito digitalizado presentado a través del sistema informático de este Tribunal el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, Salvador González Jauregui, por su propio derecho demanda en la vía contenciosa administrativa en contra de las autoridades citadas en el párrafo que antecede, teniéndose como actos impugnados: **I. Respecto del vehículo con placas de circulación JU82459 del Estado de Jalisco** la infracción foliada con número: 293683808, y 275168017, atribuidas a la Secretaría de Transporte del Estado, **II. Respecto del vehículo con placas de circulación JMR5673 del Estado de Jalisco:** la infracción foliada con número: 377454602, 378474369, 378516409, 378676125, 378785571, 378960830, 379076578, 379469478, y 379835872, atribuidas a la Secretaría de Seguridad del Estado; demanda que se admitió por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

2. En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza; así mismo, se ordenó emplazarlas corriéndoles traslado con los archivos digitalizados del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran contestación, bajo el apercibimiento legal correspondiente en caso de omisión, así mismo, se les requirió para que al momento de dar contestación a la demanda exhibieran copias certificadas de los actos que les fueron atribuidos, bajo el apercibimiento legal en caso de no hacerlo.

3. Con fecha catorce de octubre del dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Transporte, por contestada la demanda y por admitidas las pruebas que exhibieron, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, de igual forma, por otro lado, se ordenó dar trámite al Recurso de Reclamación que interpuso la Secretaría de Transporte del Estado, por lo que se remitió a Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional las constancias necesarias para su resolución.

4. Mediante acuerdo de fecha siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo dictando sentencia respecto del Recurso De Reclamación que interpuso la Secretaría de Transporte del Estado.

5. Con fecha de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaría de Seguridad del Estado, por contestada la demanda y por admitidas las pruebas que exhibió, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza, por otro lado, se tuvo exhibiendo copias certificadas de las infracciones foliadas con los números: **377454602, 378474369, 378516409, 378676125, 378785571, 378960830, 379076578, 379469478, y 379835872**, asimismo, respecto de la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que hizo valer la a Secretaría de Seguridad del Estado, por lo que se concedió a la parte actora el término de ley para que ampliara la demanda respecto de los mismos y se ordenó correr traslado a la parte actora con las copias simples del escrito de contestación y los documentos adjuntos al mismo.

6. Por auto de fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo por precluido el derecho de la parte actora de ampliar su demanda, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, finalmente, se advirtió que no existía ninguna prueba pendiente por desahogar, por lo que se concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, razón por la cual se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

C O N S I D E R A N D O

I. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica del



Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa, 115 y 119 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los lineamientos para la substanciación de juicio en línea aprobados por la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, en la Decimoctava Sesión Ordinaria celebrada el día cinco de noviembre del dos mil veintiuno, publicados en el periódico oficial "el Estado de Jalisco", el dieciocho de noviembre del citado año.

II. La existencia de las infracciones controvertidas se desprenden de las impresiones de los Adeudos Vehiculares, mismas que corresponde a la reproducción digital de los originales por así manifestarlo bajo protesta de decir verdad la parte demandante, a la cual se le otorga pleno valor probatorio al tenor del numeral 406 Bis del Código de Procedimientos Civiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos legales del Estado de Jalisco, por tratarse de información que consta en un medio electrónico de la página oficial de la Tesorería del Municipio de Guadalajara del Estado de Jalisco, de la página oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el enlace: <https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/adeudo.jsp>.

III. El interés jurídico del accionante, quedó colmado con los adeudos vehiculares señalados con antelación, concatenados con las tarjetas de circulación, el cual la parte actora manifiesta bajo protesta de conducirse con total veracidad que corresponde a una reproducción digital del original, en los cuales se desprende de manera coincidente el número de placas vehiculares, y se señala en esta última al demandante como propietario del automotor materia de los actos controvertidos, documento al cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 399 del Código de Procedimientos Civiles, 58 y 125 de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, y en los cuales se desprende de manera coincidente el número de placas vehiculares, y se señala en este último al demandante como contribuyente responsable del automotor materia de los actos controvertidos.

Cobra aplicación a lo expuesto, por las razones que sustenta, la tesis (III Región) 4o.47 A (10a.)¹, sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, que establece:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE UNA INFRACCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE Y LA TARJETA DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES PARA ACREDITARLO CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DE AQUÉLLA Y NO SE TRATE DE UNA CONDUCTA PROPIA E INHERENTE ÚNICAMENTE AL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO INVOLUCRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La cédula de notificación de una infracción en materia de movilidad y transporte y la tarjeta de circulación son suficientes para acreditar el interés jurídico en el juicio contencioso administrativo en el que se demanda la nulidad de aquélla, sin que resulte indispensable acreditar la propiedad del vehículo involucrado, si la infracción no deriva de una conducta propia e inherente únicamente a su propietario, sino que atañe al responsable de su movilización terrestre. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, las infracciones a las que se refiere dicha legislación son aplicables tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente. No siendo aplicable, ni analógicamente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 175, de rubro: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE.", en virtud de que trata un tema distinto; la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que se reclame el embargo trabado sobre un vehículo automotriz, en el que se establece que, por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que éste

¹ Página 1167, Libro 8, Julio de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable con el número de registro 2006923, en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,



es su titular.

IV. Toda vez que al contestar la demanda el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, esgrimió una causal de improcedencia y sobreseimiento, por ser una cuestión de previo pronunciamiento y orden público, en términos de lo dispuesto por el arábigo 30 último párrafo de la ley de la materia, se procede en primer término a su estudio, en el presente juicio se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, *"dado que existe consentimiento tácito en virtud de que no promovió el juicio en materia administrativa dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se efecto el pago del acto administrativo."*

Este Juzgador considera infundada la causal sintetizada con antelación, ya que no allegó al presente juicio ningún documento con que acreditara que el accionante hubiese realizado el pago de los actos a que se refiere, y con ello demostrar que el actor interpuso extemporáneamente su demanda.

V. Al no existir otras cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado por el demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

Es aplicable la jurisprudencia número PC.III.A. J/9 A (11a.)², sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que señala:

"JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA COMPLETA Y DE MAYOR BENEFICIO, LOS TRIBUNALES LOCALES ESTÁN OBLIGADOS A ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE NULIDAD DE FONDO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA ADOLEZCA DE REQUISITOS FORMALES.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias sobre la interpretación del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, esto es, si el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad tiene o no la obligación de analizar de manera preferente los conceptos de anulación vinculados con el fondo del asunto, cuando de manera prioritaria se hubiese declarado fundado un motivo de disenso de forma (indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto). Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que en atención a los principios de mayor beneficio y de justicia completa, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco debe y tiene la obligación de decidir sobre los conceptos de anulación de fondo, con independencia de que el acto impugnado carezca de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. Justificación: De la interpretación armónica y funcional de los artículos 1, primer párrafo, y 72 a 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se obtienen las siguientes premisas: El Tribunal de Justicia Administrativa estatal debe resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares; se fijan los requisitos que debe contener la sentencia (fijación clara de la litis, fundamentos jurídicos, puntos resolutivos y los términos del cumplimiento); no obstante, los formalismos judiciales constituyen un obstáculo para la resolución de los asuntos; de igual manera, las causas de nulidad comprenden tanto aspectos de fondo como de forma. Luego, derivado del análisis del anterior segmento normativo, a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se pueden extraer diversos principios, a saber: congruencia, exhaustividad, justicia completa y mayor beneficio, pro fondo, entre otros. En ese contexto, por regla general, el Tribunal de Justicia Administrativa local debe identificar todos los argumentos en que descansa la pretensión anulatoria de la parte actora, sobre todo aquellos donde se hacen valer argumentos orientados a obtener la insubsistencia total del acto impugnado; es decir, argumentos encaminados a obtener el mayor beneficio, cuyo objetivo es restituir al particular en el goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes del acto o

² Publicada con el registro digital número 2024109, Instancia: Plenos de Circuito, undécima época, Semanario Judicial de la Federación.



resolución impugnados...”

VI. En ese sentido, este Juzgador analiza el planteamiento del accionante, consistente en la negativa lisa y llana de conocer el contenido de las infracciones impugnadas, ya que se enteró de su existencia el ocho de septiembre de dos mil veintidós, al acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, en virtud de que no le fueron notificados.

Se considera que asiste la razón a la parte actora, ya que al negar **lisa y llanamente** conocer los documentos en que consta la misma, la carga de la prueba sobre la legal existencia por escrito correspondía a la autoridad demandada a quien le fue imputado, tal y como lo establece el numeral 48 Bis de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que a continuación se transcribe:

"Artículo 48 Bis.- Las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven, cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho"

Entonces, al ser la Secretaría de Transporte del Estado, a quien la parte actora imputó las cédulas de infracción, debía acreditar en este juicio su emisión conforme a los requisitos de legalidad contenidos en el numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como su constancia de notificación y en ese tópico permitir a la parte actora que ampliara su demanda al respecto. Pero no lo hizo así, de ahí que no colmaron con su carga probatoria, al no demostrar si los mismos cumplían con los requisitos de validez. A mayor abundamiento, se considera importante resaltar que los actos administrativos, por regla general, se presumen legales, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 48 Bis de la Ley de Justicia Administrativa y 14 y 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, pero lo anterior tiene una excepción, estatuida en los mismos ordinales: cuando el gobernado **niega lisa y llanamente** conocer el acto, sin que la negativa implique la afirmación de otro hecho las autoridades son las que tienen la carga de la prueba, como ocurrió en la especie, caso en el que, como no puede demostrarse un hecho o acontecimiento negativo, la obligación de demostrar si el acto es legal se revierte hacia la autoridad, la cual debe exponerlo, lo que en este caso omitió la enjuiciada, además de que no allegó al presente juicio el acto controvertido como se aprecia de constancias, de ahí que no desvirtuaron la negativa formulada por la parte actora al respecto.

Así, la omisión procesal referida, provoca que la parte actora quede en estado de indefensión al no poder conocer los pormenores y circunstancias contenidas en los actos controvertidos, ya que no puede verificar si se sitúa dentro de los supuestos legales de infracción que señaló la autoridad emisora en él; además de que resulta evidente que la accionante no puede ejercer su derecho de audiencia y defensa en contra de la actuación que le fue imputada, toda vez que nunca se le dio a conocer.

En consecuencia, debe considerarse que la autoridad enjuiciada en el caso que nos ocupa, no cumplió con la obligación procesal de que se trata, al no desvirtuar la negativa de la actora, relativa a que no conocía la referida infracción, por consiguiente se debe declarar la nulidad de la misma, al no poderse verificar si el documento impugnado cumplía o no con lo dispuesto en los ordinales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; considerándose que en la especie se actualiza la causal de anulación prevista por los preceptos 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana de I. Respecto del vehículo con placas de circulación JU82459 del Estado de Jalisco la infracción foliada con número: 293683808, y 275168017, atribuidas a la Secretaría de Transporte del Estado.**

Apoya lo sentenciado la jurisprudencia número 2a./J. 209/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 188/2007-SS bajo la voz:

"JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN."
Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el



principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación."

Así mismo, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 117/2011³, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/2011 que es del tenor siguiente:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Conforme a la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el momento de la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior por el Magistrado instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los principios de economía e igualdad procesales, que serían incumplidos con una conclusión distinta."

Igualmente cobra aplicación lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro 3, Tomo 4, diciembre de dos mil once, página 2645, con número de registro 160591, de rubro:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU

³ Visible en la página 317 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil once, consultada por su voz en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



NULIDAD LISA Y LLANA. *Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."*

VII. Respecto de las infracciones con números de folio: **377454602, 378474369, 378516409, 378676125, 378785571, 378960830, 379076578, 379469478, y 379835872**, imputadas al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, se estudia el concepto de impugnación planteado por el actor en que argumentó que las cédulas de infracciones impugnadas no se encuentran suficientemente fundada y motivada, ya que se desconoce las razones, hechos y circunstancias particulares por las que se impuso las sanciones determinadas, ya que no se tomaron en cuenta los elementos que exige el artículo 16 Constitucional.

Se estima fundado el concepto de anulación planteado por el enjuiciante, toda vez que el requisito de la debida fundamentación y motivación se satisface en el cuerpo de un acto administrativo cuando la autoridad que lo efectúa cita los ordinales aplicables al caso concreto y precisa las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para expedirlo, efectuando una adecuación entre las situaciones jurídicas o de hecho y las hipótesis contenidas en los preceptos legales en los que sustentó su actuar de acuerdo a lo estatuido en el numeral 16 Constitucional.

Ahora bien, de la lectura de las cédulas de infracción controvertidas se advierte que fue fundamentada por la autoridad demandada, de acuerdo al siguiente numeral:

Ley de Movilidad y Seguridad del Estado de Jalisco

"Artículo 183. *Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:*

III. *Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad. En aquellas zonas en que expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como son las próximas a centros escolares y hospitales, el reglamento señalará tanto la velocidad máxima permitida en ellas como qué otras zonas se considerarán con velocidad restringida. En estos casos no habrá tolerancia alguna y, en consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida".*

Señalando como motivación la siguiente:

"Artículo 183. *Se sancionará a los conductores o propietarios de vehículos que cometan las siguientes infracciones:*

III. *Al conductor de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad. En aquellas zonas en que expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como son las próximas a centros escolares y hospitales, el reglamento señalará tanto la velocidad máxima permitida en ellas como qué otras zonas se considerarán con velocidad restringida. En estos casos no habrá tolerancia alguna y, en consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida;*

Artículo 195. *En aquellas vías públicas donde exista señal restrictiva de velocidad, si podrá hacerse valer una tolerancia de diez kilómetros por hora".*



De ahí que este Juzgador concluye que la Secretaría de Seguridad del Estado, autoridad emisora del acto impugnado, para efectos de cumplir con lo que estatuye el numeral 16 Constitucional ante la presencia de imposición de multas, debió demostrar de manera fehaciente la falta cometida, pues al constituir éstas una afectación al patrimonio del gobernado, es requisito indispensable que las mismas se encuentren debidamente fundadas y motivadas en forma individualizada, prudente y pormenorizada, según las constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate, lo que no ocurre en la especie, pues del análisis de las cédulas controvertidas se advierte únicamente la transcripción parcial del precepto legal que consideró violentado, sin que se constate la descripción exhaustiva de la conducta imputada, pues no se advierte la existencia del señalamiento restrictivo de celeridad, el cual es un elemento indispensable para que se configure el supuesto legal establecido en el numeral 183 fracción III de la Ley de Movilidad y Seguridad del Estado de Jalisco.

Apoya a lo anterior, las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito⁴ y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁵, que estatuyen lo siguiente:

"INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN. *Aun cuando en un recibo de infracción de tránsito, en la clasificación de ésta, se transcriba un artículo y sea a todas luces conocido que esto significa que la violación cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere, o bien que se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso la infracción, no puede considerarse jurídicamente como una resolución fundada y motivada de acuerdo al artículo 16 de la Carta Magna".*

"MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA. *De conformidad con lo que estatuye el artículo 16 de la Constitución Federal de la República, cualquier acto de afectación en el patrimonio de un gobernado o particular, como lo es en la especie de imposición de una multa, debe fundarse y motivarse, pero siempre en forma individualizada, prudente y pormenorizada, según las constancias o datos que informen el caso concreto de que se trate; por lo cual, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente que en todo suceso concerniente a la imposición de una sanción pecuniaria o multa, se cumpla estrictamente con los citados requisitos de fundamentación y motivación, de manera individualizada, prudente y adecuada, conforme a los datos que se obtengan del asunto respectivo".*

Igualmente, aplica al caso concreto las tesis sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice:

"TRANSITO, MULTAS DE. *Si un agente de tránsito como testigo, parte y Juez, levanta una infracción, y contra su dicho resulta eventualmente diabólica la carga de la prueba, lo menos que puede exigirse de ese agente es que al levantar una infracción exprese con toda amplitud y claridad los motivos que tuvo para hacerlo, y funde en derecho, con toda claridad los motivos que tuvo para hacerlo, y funde en derecho, con toda claridad, la multa que impuso. Y también es menester que conteste la demanda que contra su acta de infracción y su resolución de multa se imponga, refiriéndose con toda claridad y precisión a los hechos que el actor narra en su demanda y en los que dicho agente tuvo intervención, pues no podrían aceptarse como motivación válida del acto impugnado su silencio, ni sus evasivas, ni las afirmaciones ambiguas que soslayan la esencia de los hechos. Tal conducta exigida del agente es un mínimo de seguridad en la aplicación de las garantías de motivación y fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional".*

⁴ Página 626, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable con el número de registro 211535 en el "IUS" de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
⁵ Visible en la página 203, volumen 217-228, cuarta parte, séptima época, localizable con el número de registro 239651, del semanario y página de internet ya citados.



Por ello, se considera que la Secretaría de Seguridad del Estado, emitió la cédula de infracción impugnada en contravención a lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose la causa de anulación prevista en el numeral 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, siendo procedente **declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de infracción con números de folio: 377454602, 378474369, 378516409, 378676125, 378785571, 378960830, 379076578, 379469478, y 379835872, atribuida a la Secretaría de Seguridad del Estado; relativa al vehículo con placas de circulación JMR5673 del Estado de Jalisco.**

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los 73, 74 fracciones I y II, 75 fracciones I y II, y 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para tramitar y resolver este juicio.

SEGUNDO. Resultó infundada la causal de improcedencia que hizo valer el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, en consecuencia, no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio.

TERCERO. La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, y las enjuiciadas no acreditaron sus excepciones, por lo tanto;

CUARTO. Se declara la nulidad lisa y llana de los actos administrativos controvertidos, consistente en: **I. Respecto del vehículo con placas de circulación JU82459 del Estado de Jalisco** la infracción foliada con número: 293683808, y 275168017, atribuidas a la Secretaría de Transporte del Estado, **II. Respecto del vehículo con placas de circulación JMR5673 del Estado de Jalisco:** la infracción foliada con número: 377454602, 378474369, 378516409, 378676125, 378785571, 378960830, 379076578, 379469478, y 379835872, atribuidas a la Secretaría de Seguridad del Estado.

QUINTO. Se ordena a la **Secretaría de Transporte del Estado**, efectúe la cancelación de la infracción señalada en el resolutivo que antecede, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

SEXTO. Así mismo, se ordena al **Secretaría de Seguridad del Estado**, efectúe la cancelación de la infracción descrita en el resolutivo cuarto, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

NOTIFÍQUESE MEDIANTE BOLETÍN ELECTRÓNICO A LA PARTE ACTORA Y A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

Así lo resolvió el Magistrado **HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ**, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante el Secretario, Licenciado **BERNARDO VILLALOBOS FLORES**, quien autoriza y da fe. La presente actuación se firma de forma autógrafa, misma que será certificada por el Secretario de Sala para escanearla y así cargarla en la Plataforma de Servicios Digitales de este Tribunal, hasta en tanto la Sala Superior implemente y habilite el uso de la firma electrónica avanzada, lo anterior de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y los arábigos 22 y 37 de los lineamientos para la substanciación del juicio en línea aprobados por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.-----

HLH/BVF/dmgm



EL C. LICENCIADO BERNARDO VILLALOBOS FLORES, SECRETARIO DE LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE LA PRESENTE ACTUACIÓN CONSISTENTE EN 8 (OCHO) FOJAS RELATIVAS AL JUICIO ADMINISTRATIVO TRAMITADO EN LÍNEA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE **3961/2022** DEL ÍNDICE DE ESTA SALA, CONTIENE LA FIRMA AUTOGRAFA TANTO DE SU MAGISTRADO PRESIDENTE, COMO DE LA SUSCRITA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO DE LOS NÚMERALES 119 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y 22 Y 37 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA APROBADOS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, APROBADOS EN LA DECIMOCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 CINCO DE NOVIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", EL 18 DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE LA CITADA ANUALIDAD. DOY FE.-

Guadalajara, Jalisco, a 16 dieciséis de febrero de 2024.

Licenciado Bernardo Villalobos Flores